

Impuestos e hipocresías

El Estado chileno está en la actualidad gastando mucho más de lo que recauda. Gran parte de estos gastos se anticipan como transitorios, pero también se discute la necesidad de elevar la carga tributaria del país, de modo de alcanzar un nuevo equilibrio, con un mayor nivel de desembolsos y de ingresos que lo que ha sido la trayectoria de los últimos años. Este debate, sin embargo, rara vez aborda las complejidades que supone avanzar hacia ese escenario. Al momento de plantear nuevos gastos abunda, por cierto, la creatividad; en el incremento de los tributos, en cambio, más que inventiva, suele haber hipocresía, o porque los análisis no dan cuenta de las dificultades políticas que tiene elevarlos —e incluso mantenerlos— o porque se recurre a estimaciones difíciles de replicar de modo independiente, pero que siempre anticipan que habría mucho espacio por medio de la reducción de evasiones y elusiones, y por pequeños ajustes en ciertos parámetros, olvidando, entre otras cosas, la enorme informalidad que subsiste en la economía chilena. Contar en este ámbito con estimaciones bien diseñadas y sujetas a escrutinios exigentes ha sido, desde hace mucho tiempo, una dificultad mayor.

Sobre el primer aspecto, una encuesta de la Dirección de Estudios Sociales de la UC es muy ilustrativa de los escollos políticos que enfrentará un eventual aumento de los gravámenes en Chile. En efecto, mientras un 56 por ciento de los chilenos cree que paga más impuestos de lo que debería, solo un cinco por ciento piensa que paga menos de lo que le corresponde. Este es un sentimiento mayoritario en todos los sectores sociales y demográficos. En particular, no deja de ser interesante el que los ciudadanos que se definen “de izquierda” —teóricamente, por ende, más partidarios de la redistribución— crean, en una proporción que es 13 puntos porcentuales más alta que en la derecha, estar pagando más impuestos de los que deberían. Por cierto, empíricamente —sobre todo si se contrasta la carga con la realidad de otras latitudes— esta aseveración es incorrecta: incluso la tasa de IVA, que genera en nuestro país una parte muy importante de la recaudación tributaria, no es más alta que la observada en la OCDE. Hay, adicionalmente,

gran entusiasmo entre los encuestados con ideas como reducir las contribuciones, el impuesto a la renta, el IVA, el impuesto al diésel y el impuesto a las bencinas, todos gravámenes —salvo el IVA— que en una perspectiva comparada son bajos.

Al mismo tiempo, los consultados apoyan subir el impuesto a las utilidades de las empresas, que ya es comparativamente alto y cuya alza en los últimos años ha tenido, aparentemente, un impacto relevante en la inversión, clave para el crecimiento y el progreso de las naciones. También hay respaldo a subir el impuesto a los alcoholes y a las emisiones de carbono. Esto último es bienvenido, pues en ambos casos hay externalidades que corregir y los niveles actuales son insuficientes para lograr ese propósito; con todo, no generarán grandes recaudaciones como las que se desea

para financiar una agenda social más agresiva. El panorama descrito hace políticamente muy complicado definir un programa de cambios tributarios que eleve la carga de modo

importante, corrija externalidades de manera profunda y minimice las distorsiones y los desincentivos que pueden provocar los impuestos. Sobre todo, si se piensa que la principal brecha en recaudación con los países más desarrollados se encuentra en los impuestos personales.

La percepción de que se pagan altos impuestos posiblemente está vinculada con una mirada crítica sobre el desempeño del Estado y sus instituciones. También han aparecido, en otros estudios, opiniones que perciben que existe mucho malgasto y que, por tanto, no hay una vocación ciudadana en la acción del Estado. En este contexto, es muy difícil darle legitimidad a un aumento de impuestos si simultáneamente no va acompañado de una preocupación por asegurar un Estado más profesional y efectivo. La realidad que muestra esta encuesta da luces también de por qué la población prefiere que un eventual aumento en las cotizaciones previsionales vaya a cuentas individuales antes que a un sistema solidario. Superar las desconfianzas que dejan entrever estos antecedentes es un desafío político mayor, que supone moderar las expectativas respecto del alcance que puede tener una reforma tributaria, al menos en el corto plazo.

*A la luz de estas percepciones ciudadanas,
cabe moderar las expectativas respecto del
alcance de una reforma tributaria.*